

VOTO PARTICULAR

Comisionada Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRA 3764/22

Sujeto obligado: Secretaría de Educación Pública

Folio de la solicitud: 330026022000456

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

Voto particular de la Comisionada Josefina Román Vergara, emitido con motivo de la resolución del recurso de revisión con número de expediente RRA 3764/22, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública, votado en la sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ocho de junio de dos mil veintidós.

El Pleno de este Instituto determinó, **MODIFICAR** la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que entregue al solicitante la resolución de su Comité de Transparencia, a través de la cual, de manera fundada y motivada, clasifique en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos solicitados de una persona plenamente identificable, a saber, su historial académico actual o tira de materias, fecha en que inicio de la prepa en línea, los ciclos escolares que ha cursado y cuales son los periodos de estos ciclos, así como las calificaciones que ha obtenido [contenidos de información 1, 2, 3, y 5].

Al respecto emito **voto particular**, en virtud de que se considera que el contenido "4", no debe tenerse como acto consentido, pues el sujeto obligado se pronunció de manera genérica sobre la petición de la parte recurrente, por lo que lo procedente era analizar la naturaleza de dicha información y resolver en consecuencia.

En el caso en concreto, es importante precisar que un particular solicitó a la Secretaría de Educación Pública, señalando como modalidad de entrega, por internet, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información de una persona identificada.

1. Historial académico actual o tira de materias.
2. La fecha en que inició la Prepa en Línea
3. Los ciclos escolares que ha cursado y cuáles son los periodos de estos ciclos escolares,
4. Cuántos ciclos escolares integran el Programa Prepa en Línea, y
5. Las calificaciones que ha obtenido en los ciclos escolares que ha cursado.

VOTO PARTICULAR

Comisionada Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRA 3764/22

Sujeto obligado: Secretaría de Educación Pública

Folio de la solicitud: 330026022000456

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

En respuesta, el sujeto obligado informó que no podía entregar la información solicitada, debido a que la parte recurrente no acreditó la titularidad sobre los datos personales.

Inconforme, la parte solicitante interpuso el recurso de revisión en el que se agravio exponiendo lo siguiente: "... la información **se niega bajo el argumento de que se tratan de datos personales**, siendo que la información requerida **versa sobre niveles cursados y calificaciones obtenidas**, por lo que es evidente que **no se tratan de datos personales** circunstancia que no analizan los miembros del Comité; por lo cual se pide se analice nuevamente la petición y en su caso se de vista al Órgano Interno de Control..." (sic).

Sobre este particular, la resolución en comento determinó establecer el agravio en la clasificación de la información, tomando como acto consentido **lo concerniente a cuántos ciclos escolares integran el Programa Prepa en Línea (contenido 4)**; por lo que dicho análisis quedó fuera del estudio de fondo.

Ahora bien, se estima que la interpretación realizada al recurso de revisión en comento no considera el principio de máxima publicidad, toda vez que de la lectura de la respuesta emitida por el sujeto obligado, se advierte que se pronunció de manera genérica sobre los contenidos de interés, sin hacer una mención específica sobre el contenido 4.

En este sentido, se tiene que la parte solicitante se agravio por el pronunciamiento genérico realizado por el sujeto obligado, en el sentido de clasificar los contenidos de interés.

Luego entonces, la postura los integrantes del Pleno, inhibe que el Instituto atienda a cabalidad su obligación de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, por lo que se estima que, en la especie, se podría adoptar una interpretación amplia del agravio, que permita determinar cuáles son los actos reclamados por los solicitantes, observando en todo momento la intención primigenia de éstos, es decir, considerando en todo momento cuál es la expectativa de los particulares al presentar sus solicitudes de acceso, e interpretarlas bajo los principios de máxima publicidad y pro persona.

Ahora bien, resulta importante señalar el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

VOTO PARTICULAR

Comisionada Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRA 3764/22

Sujeto obligado: Secretaría de Educación Pública

Folio de la solicitud: 330026022000456

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...”

Con base en dicho precepto constitucional, se tiene que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en el marco jurídico nacional como internacional del cual el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección.

En ese tenor, las autoridades –como lo es este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De ello, se desprende que este Instituto se ciñe a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, en el ámbito del derecho de acceso a la información y del derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Bajo la lógica de lo anteriormente relatado, estimo en asuntos como el que se comenta, al realizar la interpretación amplia del agravio de la persona recurrente, se garantiza el estudio amplio del fondo de la cuestión planteada.

En consecuencia, para efecto de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de la solicitante, es preciso considerar el principio pro persona, y estudiar todos los contenidos de interés de la parte recurrente; ello, con la finalidad de determinar

VOTO PARTICULAR

Comisionada Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRA 3764/22

Sujeto obligado: Secretaría de Educación Pública

Folio de la solicitud: 330026022000456

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

la procedencia o improcedencia de la atención realizada por el sujeto obligado, y en su caso, que este Instituto, mediante la instrucción respectiva, restaurase el ejercicio del derecho de acceso del particular, propiciando con ello un recurso eficaz y rápido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada que se cita enseguida:

“PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el **principio "pro homine"**, el cual **consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio.** En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la cual **se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional.** Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice su ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la jerarquía formal de aquélla.”¹

Aunado a lo anterior, no se debe soslayar lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación ha señalado en la tesis con el rubro **INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURÍDICO DE SU COMPETENCIA, FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA**², en el sentido de que este Instituto es responsable de garantizar el

¹ Tesis I.4o.A.20 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, Décima Época, p. 1211.

² Tesis I.7o.A.3 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, octubre 2017, p. 2444.

VOTO PARTICULAR

Comisionada Josefina Román Vergara

Número de expediente: RRA 3764/22

Sujeto obligado: Secretaría de Educación Pública

Folio de la solicitud: 330026022000456

Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña
Llamas

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, y está sujeto, como todas las demás autoridades del Estado, a la obligación impuesta en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual se logra al interpretar el orden jurídico de su competencia, a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por lo tanto, con base en las normas y principios aludidos con anterioridad, considero que en la presente resolución no debió de tenerse como acto consentido el contenido número 4.

A partir de los razonamientos vertidos, con fundamento en las Reglas Segunda, numeral vigesimotercero y cuadragésima cuarta de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Sector Público, formulo el presente **voto particular** a la resolución al recurso de revisión RRA 3764/22, en virtud de que se considera que el contenido "4", no debe tenerse como acto consentido, pues el sujeto obligado se pronunció de manera genérica sobre la petición de la parte recurrente, por lo que lo procedente era analizar la naturaleza de dicha información y resolver en consecuencia.

Josefina Román Vergara
Comisionada

